

# FRONTLINE

## LATIN AMERICA

Febrero - Abril 2007

PUBLICACIÓN DE LA CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

Vol 2 No 5

Precio £1.00



**“Nuestros pueblos están en peligro de extinción”**

*Conferencia de Luis Evelis Andrade en Londres, durante su gira por el Reino Unido. Luis Alvis es el actual presidente de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC)*

QUIERO EMPEZAR por decir que en nuestro país, Colombia, los terratenientes, desde tiempos inmemoriales han desarrollado una política de despojo hacia los pueblos indígenas. Ellos desarrollaron una estrategia que se llamó el Cerraje. El Cerraje consistía en que el terrateniente les quitaba la tierra a los indígenas y luego los sometía a trabajar seis días de la



semana y solamente les daba uno para que sembrara algo para ellos. Esto hacía que el indígena se convirtiera en un esclavo y se endeudara para toda la vida con el terrateniente que le había quitado las tierras. Pero además ocurrió una cosa en el ámbito legal y es que los jueces, que también eran familia de los terratenientes, disolvieron los derechos a los resguardos indígenas que reconocían la propiedad de los pueblos. Además hay que decir que las misiones católicas jugaron un papel muy importante en la legitimación de esa estrategia de expropiación territorial. En la región del Cauca la iglesia era dueña de una gran parte de las tierras que habían perdido los indígenas. En la década de los 70, los indígenas, decidieron empezar a leer las leyes coloniales que les reconocían títulos de propiedad. Inspirados en la lucha desarrollada por Manuel Quintín Lame en los 50 y los 60, empezaron a

*continucion en pagina e2*



Campaign contacts on page 25

COLOMBIA  
SOLIDARITY  
CAMPAIGN

## SE DESTAPA EL PARAESTADO EN COLOMBIA

Cristóbal Jara

Durante los últimos meses del año 2006, Colombia se vio sumida en el escándalo político más grave que haya debido enfrentar el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez desde su primera administración. Sin embargo el escándalo de la “Para-política” en Colombia, parece no haber tocado fondo, pues según algunos analistas este se agudizará en este año de 2007, cuando los organismos de control como la Fiscalía General de la República, Procuraduría General y la Corte Suprema de Justicia llamen a indagatoria a congresistas que parecen estar implicados con los grupos paramilitares de la Costa Atlántica y otras regiones del país. Estas informaciones han sido obtenidas a través del famoso “computador de “Jorge 40”, cuyo verdadero nombre es Rodrigo Tovar Pupo, jefe de las Autodefensas de Colombia (AUC) Bloque Bolívar.

El ex jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Rafael García, detenido por la Fiscalía y vinculado al escándalo de corrupción al interior de este organismo, se convirtió

en testigo clave para desenmascarar a Jorge Noguera, entonces director del DAS y jefe de campaña de Álvaro Uribe Vélez para las elecciones de 2002 en el departamento del Magdalena.

García sostuvo ante la Fiscalía que en dichas elecciones hubo un fraude de unos 300 mil votos en varios municipios de la Costa, todo organizado y ordenado por “Jorge 40” y Jorge Noguera, y sin los cuales Álvaro Uribe habría tenido que ir a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2002.

De igual manera, Rafael García denunció otros cargos muy serios contra el director del DAS, Jorge Noguera, entre otros los de pasar una lista de opositores al gobierno, defensores de derechos humanos y sindicalistas, al jefe paramilitar “Jorge 40”. Según García, en noviembre de 2003, funcionarios del DAS y miembros de las AUC enviados por Jorge 40 asesinaron a Zully Codina Pérez, enfermera del Hospital Central de Santa Marta que pertenecía a la Confederación General De Trabajadores de Colombia, seccional Magdalena, y el 17 de septiembre de 2004 asesinaron en Barranquilla al profesor Alfredo Correa D’Andreis. “Me sorprendió mucho el asesinato del profesor Correa puesto que yo había visto

el listado antes de esos hechos” dijo Rafael García. Con la incautación del computador de “Jorge 40”, se confirmó la existencia de la lista negra de sindicalistas, estudiantes y dirigentes de la oposición a ser ejecutados.

En diciembre de 2005, cuando se hicieron públicos los escalofriantes hechos, y medios de prensa como la revista Semana y Cambio entre otros, cuestionaron el nombramiento de Noguera, primero en el DAS y luego el cónsul de Colombia en la ciudad de Milán, Italia, el presidente Uribe salió a defenderlo como una persona intachable y pulcra y en cambio se refirió a los medios como enemigos de la democracia y las instituciones. Hoy, el señor Jorge Noguera esta siendo investigado y se espera un fallo de las máximas instituciones de justicia para los primeros meses de 2007.

En un debate adelantado por Gustavo Petro en la Cámara de Representantes el 18 de Mayo de 2005, llamado Paramilitarismo y Política en Sucre, el congresista denunció una serie de irregularidades, que vinculaban algunos congresistas costeños con las actividades delictivas del paramilitarismo, en el

*continucion en pagina e2*

Gary Leech / Colombia Journal

# FRONTLINE LATIN AMERICA

## Nuestros Pueblos están en peligro de extinción continúen

plantear la idea de reclamar legalmente las tierras. De no poderse hacer de esta manera, también estaba la idea de recuperarlas por la vías de hecho. Esto fue lo que llevó a muchos dirigentes indígenas a organizar la recuperación de la madre tierra, en los años 70.

Tuvieron que enfrentarse a los terratenientes, a las iglesias, a los militares, en la recuperación de sus tierras. Muchos de nuestros dirigentes en ese entonces fueron perseguidos, otros fueron asesinados, otros torturados. Esta situación conllevó a que los indígenas del Cauca recuperaran gran parte de los territorios que habían perdido desde la colonia hasta esa época. Además esta lucha por la tierra inspiró la necesidad de organizarse para reclamar otros derechos como los de la salud, la educación, el reconocimiento del gobierno propio y de la autonomía. Hoy tenemos que decir que gracias a esta lucha que nos ha costado muchos muertos, mucho derramamiento de sangre, los pueblos indígenas en Colombia tengamos, por lo menos en título, 33 millones de hectáreas.

Después de nacida la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en 1982, se han dado otras luchas y varios logros bien importantes en nuestra tarea organizativa. Hay que recordar que en 1991 los pueblos indígenas participamos de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta Constitución reconoció a los indígenas como pueblos existentes, porque anteriormente no éramos reconocidos. En esta Constitución se reconoció nuestros idiomas, nuestro gobierno, nuestros territorios, nuestra justicia, un modelo de educación y salud adecuada a nuestros pueblos indígenas. Nuestro ex constituyente Lorenzo Muelas, dijo hace dos semanas que él y los pueblos indígenas tenían mucha esperanza de que el país fuera a cambiar, pero que hoy 15 años después, él se siente defraudado. ¿Cuáles son las razones por las cuales los pueblos indígenas nos sentimos defraudados? El presupuesto para compra de tierra se ha disminuido casi en un 95 por ciento, nuestras tierras están siendo invadidas y usurpadas por colonos, narcotraficantes y paramilitares. Las multinacionales del petróleo, del gas, del carbón, de la minería, se están apropiando de nuestras tierras. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ancianos, se están muriendo de desnutrición y de enfermedades prevenibles y curables. La guerra que se desarrolla ha llegado a nuestro territorio y esta generando muchos problemas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario.

Quiero señalar que en el gobierno de Uribe se ha incrementado el desplazamiento forzado, las desapariciones forzadas de nuestros dirigentes, el encarcelamiento de nuestros líderes acusados de ser terroristas y están en peligro de extinción muchos de nuestros pueblos. La militarización de nuestros territorios con la creación de batallones de alta montaña, el programa de soldados campesinos en el marco de la política de “seguridad democrática”, no ha servido más que para violar cada vez los derechos humanos de nuestras comunidades.

Quiero señalar que como en el pueblo U’wua han sido asesinadas más de 20 personas que han sido detenidas por el Ejército. Una vez el Ejército los detiene, los asesina y los presenta como dados de baja en combate diciendo que son guerrilleros. Esto lo hace el gobierno colombiano y las fuerzas militares para mostrar ante la comunidad internacional resultados y evidencias de que su política si funciona. Lo otro que quiero decir es que el narcotráfico es un problema que afecta los territorios de los pueblos indígenas. Pero lo más serio es que la política que está desarrollando el gobierno de Uribe para combatir el narcotráfico, es mucho más grave para nuestros pueblos que el mismo narcotráfico. Las fumigaciones con

glifosato están generando desplazamiento, pérdida de la seguridad alimentaria, desnutrición y contaminación ambiental. Por eso le estamos pidiendo a la comunidad internacional que haga un mayor seguimiento, un monitoreo a ese apoyo que le dan a Uribe en lo militar y en la lucha contra el narcotráfico.

Como ustedes pueden ver, muchos de los logros y de los sueños que hemos tenido, están siendo afectados por la guerra, el narcotráfico, las minutas estatales y la falta de políticas reales de protección de los pueblos indígenas por parte del Estado colombiano. Seguramente allá en la cabeza de ustedes está rondando la pregunta: ¿Y qué pasó con la Madre Tierra? Quiero decirles que éste es uno de los temas más complicados y complejos en la relación entre el gobierno y los pueblos indígenas. Un estudio de la Defensoría del Pueblo ha dicho que, ha pasado que, los indígenas por avanzado en la recuperación de sus territorios, casi un 50 por ciento tiene necesidades de tierra. Pero la actitud del gobierno colombiano, sobre todo el ministerio de agricultura, ha sido: ni un peso más, ni



un metro más de tierra para los indígenas. Entonces encontramos como en algunos lugares del país, por ejemplo en el Quindío, la gobernadora del departamento, la alcaldesa de un municipio, se oponen a la compra de un pedazo de tierra para los indígenas que andan deambulando por las calles.

Está ocurriendo un hecho grave y es que los paramilitares se están apropiando de las tierras que le han entregado a los indígenas. Quiero señalar con un ejemplo: hace 8 años el gobierno compró una tierra para unos indígenas en el municipio de Trujillo, Valle. El alcalde actual es quien ha tomado estas tierras y se opone a que las reciban los indígenas, a pesar de que un juzgado ordenó entregar estas tierras. Y los indígenas tienen mucho miedo, porque este alcalde es sobrino de uno de los peores criminales del país. Para los que conocen Colombia, se trata de un señor Loaiza, denominado “el alacrán”, que cometió una masacre en Trujillo, Valle, hace muchos años. Fueron más de 150 los desaparecidos, asesi-

nados por este señor “alacrán”, por lo cual el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto quiere decir que los indígenas en este caso esta confrontando a un monstruo, a un criminal. Y él ha dicho que no le vale ley, ni ejército ni nada. Pues el tiene el poder.

Por eso los indígenas, en vista de que no hay voluntad del gobierno para resolver los problemas, han decidido volver a la estrategia de los años 70: recuperar la tierra. Es lo que llamamos liberación de la Madre Tierra. El año antepasado los indígenas del Cauca decidieron tomarse una finca llamada “La Emperatriz”, para reclamar respuesta real del gobierno de Uribe. Pero quiero recordar que esto ocurre porque hace 14 años los paramilitares asociados con la policía, asesinaron 20 indígenas que estaban recuperando una finca. Por este hecho el estado no ha cumplido ni en un 40 por ciento esta obligación que tiene ante los tribunales internacionales. Y cuando los indígenas decidieron tomar las tierras nuevamente, por vías de hecho, lo primero que hizo el gobierno fue decir que eran guerrilleros, que eran terroristas. Le dio un tratamiento militar a este asunto. Los atacó con bombas, tanques y fusiles, y de esto el resultado han sido varios muertos.

Recuerdo que el ejército y la policía tomó preso a un compañero, le echaron gases en los ojos y la boca y después de torturarlo, le cortaron los dedos con un machete y después le iban golpeando los dedos con un palo, bajo la acusación de que era guerrillero. Ese es el precio de la decisión y de la lucha que los indígenas están desarrollando por recuperar sus tierras. Por eso el año entrante vamos a hacer un congreso de todos los pueblos indígenas con el fin de definir esa estrategia, así nos cueste la vida a muchos dirigentes. Ante la falta de cumplimiento y de voluntad del Estado, hemos decidido que no nos queda otro camino que las vías de hecho, la recuperación de la Madre Tierra. La violación de derechos humanos, asesinato de nuestros líderes, bombardeos con helicópteros a nuestras marchas y manifestaciones pacíficas, ha ocurrido con la ayuda militar dada por los Estados Unidos y por algunos gobiernos europeos. Tengo entendido que el gobierno británico ha contribuido también con ayuda militar.

Quiero decir finalmente, que esta lucha no solamente ha sido reprimida para los indígenas, sino también para los negros, los campesinos, los pobladores urbanos que reclaman sus derechos. En el mes de mayo, cuando los indígenas hicieron esta movilización que fue reprimida con helicópteros, tanquetas y bombas, también se movilizaron los indígenas del departamento de Nariño. Y en esa represión a los campesinos de Nariño, desaparecieron 110 personas y fueron asesinadas otras cuatro, sin embargo, esto no se conoce, esto quedó oculto. Quiero decir que si esto pasa con los pueblos indígenas y campesinos que están organizados, ¿qué no pasará con la gente que no esta organizada? Y lo que quiero con estas palabras es decirles que la realidad que muestra el gobierno colombiano de Uribe no es cierta, que allá lo que está ocurriendo es otra cosa. Quiero agradecerle a la Campaña (Campaña de Solidaridad por Colombia) por permitir escuchar esta voces, pero también, llamarla a que nos ayude, a que los campesinos, los negros, los indígenas, los excluidos, podamos expresar esa otra cara de la realidad que niega el estado colombiano. Ayúdenos en ese propósito y en esa exigencia a los actores del conflicto, tanto a la guerrilla, a los paramilitares y al gobierno a que definitivamente le busquemos una salida política al conflicto social y armado que vive nuestro país. Y quiero decir que todo el problema en relación a nuestros territorios, está asociado a los intereses económicos de orden nacional e internacional. La estrategia de guerra y de desplazamiento es para que abandonemos y no reclamemos nuestros derechos.

## Se destapa el paraestado en Colombia continúen

cual sindicaba al senador Álvaro García como autor intelectual de las masacres de Macayepo y Chengue. Así denunciaba el entonces Representante a la Cámara Gustavo Petro los hechos: “Vamos a ver qué pasa en Macayepo: quince campesinos son asesinados por miembros de un grupo paramilitar a garrote, piedra y machete. No se les dispara. Se les destruyen las cabezas con piedras y se les descuartiza con machetes. La fecha exacta es el 16 de octubre de 2000... Sigamos adelante. Porque después, unos días después, unos meses después, el 17 de enero de 2001, por la misma vía, sobre los Montes de María, acercándose a Bolívar, sucede otra masacre: la de Chengue. El 17 de enero de 2001 los paramilitares sacaron de sus casas a los pobladores del corregimiento de Chengue, en los Montes de María, y los obligaron a reunirse en el parque, donde asesinaron a 25 personas con golpes y con armas corto-punzantes, a quienes acusaron de cooperar con la guerrilla. Dos personas más fueron obligadas a acompañar a los paramilitares en su huida de Chengue y sus cadáveres fueron hallados dos horas después”.

En este mismo debate, el representante Petro denunció otro de los espeluznantes casos de muerte y corrupción del contubernio entre políticos, paras y narcotraficantes. Se trata del asesinato de Eudaldo León Díaz Salgado, alcalde de El Roble en el departamento de Sucre. El alcalde había tenido el valor de denunciar a sus futuros asesinos en un consejo comunitario celebrado en Corozal en marzo de 2003, y lo hizo ante el propio presidente Álvaro Uribe

Vélez. Según el alcalde, sus asesinos serían el entonces gobernador de Sucre Salvador Arana en confabulación con otros políticos de la región, la procuraduría departamental y los jefes paramilitares Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena” y “Diego Vecino”.

Efectivamente, semanas después el alcalde Díaz Salgado apareció asesinado. Ese mismo año, 2003, el gobernador Arana fue nombrado embajador en Chile junto a otros de sus cómplices que fueron nombrados en cargos diplomáticos en el exterior. Cuando se iniciaron las denuncias y se acopiaron algunas pruebas en contra de Arana, el ex Fiscal de la Nación Luis Camilo Osorio las archivó argumentando que “los cargos imputados por el testigo” (Jairo Castillo Peralta, quien fuera el chofer de Arana) son “inverosímiles, pues no puede creerse que una persona con la trayectoria y formación del doctor Salvador Arana Sus (se trata de un médico cirujano, con amplia experiencia en el sector público y sin antecedentes penales ni disciplinarios) participe en conductas tan reprobables como las que gratuitamente se le endilgan”. Hoy, ante la Fiscalía el señor Arana no solo es responsable de la muerte del alcalde Eudaldo Díaz sino de muchos otros crímenes.

A partir del debate desarrollado por Petro, en Colombia se empezaron a develar hechos aun más siniestros que ha terminado con el escándalo de la para-política. Y en todo esto existe un elemento común digno de tener en cuenta en el desarrollo del proceso investigativo: la mayoría de los políticos y funcionarios investigados, sino todos, han tenido relaciones muy cercanas con el Presidente Uribe,

pues todos pertenecen o han pertenecido a los diferentes grupos y partidos uribistas que se crearon durante su administración con miras a perpetuarlo en el poder, como evidentemente ha sucedido con su reelección. También es necesario señalar que durante la campaña para su reelección, muchos de los políticos hoy investigados por vínculos con el narco-paramilitarismo, fueron purgados de sus filas, algo que no impidió que fueran elegidos al Congreso y que una vez posesionados fueran llamados como si nada por el gobierno a formar una alianza que le permitiera controlar las mayorías del congreso.

Ese destape de la para-política, es decir, de la complicidad de muchos parlamentarios con los narco-paramilitares, no es realmente nuevo. Lo nuevo es que algunos congresistas (Senadores Álvaro García y Jairo Merlano y el Representante Erik Morris) han sido investigados y encarcelados, a los que se sumaron días después la excongresista Muriel Benito Rebollo y la orden de captura contra el ex gobernador del Departamento de Sucre, Salvador Arana Sus quien anda prófugo. Muchos otros están en proceso de serlo. Los parlamentarios, Mauricio Pimiento, Jorge Luis Caballero, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof, Alfonso Campo y Álvaro Araújo, tuvieron que comparecer ante la justicia. Ante la noticia de la Corte de que están siendo investigadas unas 80 personas, entre ellas altos funcionarios del Estado, figuras políticas, gobernadores, alcaldes y altos oficiales del Ejército y la Policía, el Senador Álvaro Araújo, hermano de la canciller Consuelo Araújo, afirmó que si él caía, caerían también su hermana y hasta el propio presidente de la República.

# Latinos en marcha

## Trabajadores Latinos tomaron las calles de Londres

Jake Lagnado

**H**oy en día los latinos conforman un nuevo componente de la clase trabajadora londinense. Muchos se encuentran concentrados en el campo laboral de limpieza comercial, el cual ha crecido con el auge del sector financiero durante el último cuarto de siglo, y que ha convertido a Londres en uno de los grandes centros mundiales del capitalismo financiero.

Hacia finales del 2006 hubo dos iniciativas muy relevantes para los trabajadores latinos. Primero se realizó una marcha el día 7 de octubre en la cual participaron varios grupos de inmigrantes y sindicatos bajo la consigna principal de la legalización de todos los trabajadores indocumentados. En segundo lugar, a comienzos de diciembre el sindicato T&G (transporte y general) y sus aliados llevó a cabo una jornada de protesta de tres semanas bajo la consigna de la campaña Justicia para los Limpiadores (Justice for Cleaners) con el fin de que las principales empresas de limpieza reconocieran al sindicato a nivel de toda la ciudad en futuras negociaciones.

La marcha por la legalización del 7 de octubre se realizó durante el tercer día de acción por los derechos de los inmigrantes, convocado por el Foro Social Europeo. En los dos años anteriores en Londres se hicieron una protesta en la estación de Waterloo contra los controles de inmigración de Eurostar (2004) y una marcha por la capital (2005). En Londres el evento anual fue promovido en gran parte por la red internacional de Sin Fronteras (No Borders).

Se realizó la marcha en medio de un ambiente cada vez más represivo para los inmigrantes en Gran Bretaña, caracterizado por: las deportaciones de solicitantes de asilo rechazados a Irak, Congo, Afganistán y otros países en guerra incluyendo Colombia; los intentos del estado para convertir a las empresas y al gobierno local en agentes de inmigración; y las huelgas de hambre y rebeliones que se vivieron en los centros de detención para inmigrantes. Todo esto al son de un coro de retórica anti-inmigrante de parte del gobierno y los medios de comunicación, en el cual las palabras terrorista, refugiado e inmigrante ilegal fácilmente e intencionalmente se confunden.

Si bien la marcha de 500 personas no fue la más grande, la presencia de trabajadores inmigrantes fue mucho más prominente que en años anteriores. Esta presencia latinoamericana se atribuye a la difusión del evento que hizo Justicia para Limpiadores/T&G y grupos como Asociación Comunitaria Latino Americana, Asociación de trabajadores Latino Americanos, Campaña de Solidaridad por Bolivia y el programa de radio Todas las Voces Todas (domingos 9-11am 1503AM).

Estos grupos latinos denuncian a diario la vulneración de los derechos del trabajador inmigrante. Por ejemplo es común que al trabajador indocumentado no se le pague semanas y hasta meses enteros de trabajo porque la empresa "cae en cuenta" que no tiene los papeles correctos o les amenazan con un supuesto allanamiento por parte de los agentes de inmigración. Efectivamente en estas situaciones los jefes y supervisores a menudo se portan como mafiosos echando a los unos y dando trabajo a los otros según les da la gana, y las empresas de limpieza y sus clientes se benefician de tener una fuerza laboral asustada y dividida. Los trabajadores indocumentados se sumaron a la marcha porque se dieron cuenta de la magnitud de estos abusos y que las leyes existentes no son suficientes para cambiar la situación.

Urge entonces la legalización del trabajador indocumentado. Con este fin los grupos antes mencionados difundieron la marcha en los típicos sitios de socialización, es decir, las iglesias, bares, restaurantes y medios de comunicación donde los trabajadores latinos se relacionan fuera del trabajo. La respuesta fue bastante positiva pero fue apenas el comienzo de un proceso, que junto con otras iniciativas tienen que desarrollarse si se van a superar los niveles de miedo y desconfianza reinantes y asegurar una nutrida presencia latina en la próxima marcha del 7 de mayo de este año.

Para seguir con este proceso incipiente no sería demás que las organizaciones de ayuda a la comunidad que subsisten a punto de becas y puestos subsidiados también dedicaran una cuota mínima de su tiempo y recursos para organizar y movilizar en vez de seguir tratando solamente de brindar soluciones individuales a problemas colectivos.

La lucha por los derechos de los trabajadores inmigrantes es parte de la lucha por los derechos de los trabajadores en general. Una vez organizados, los inmigrantes estarán mejor posicionados para aprovechar su fuerza colectiva y reivindicar sus derechos como trabajadores, tal como hemos visto en los últimos tiempos en los EEUU.



En este sentido la campaña Justicia por los Limpiadores del sindicato del Transporte y Sindicato de Trabajadores Generales T&G representa un paso firme para adelante. Durante los últimos 4-5 años este sindicato ha tratado de organizar a los trabajadores de limpieza de Londres, apuntando primero a las compañías más grandes de limpieza y sus contratos más lucrativos, como los que tiene con entidades financieras en Canary Wharf, la City y en el metro. Como modelo le ha servido la experiencia del sindicato SEIU estadounidense y campañas como Justicia para Porteros (Justice for Janitors) en Los Angeles, que se dio a conocer a nivel mundial por medio de la película Bread and Roses de Ken Loach. Como ahora los inmigrantes constituyen una gran parte de los trabajadores de limpieza de Londres, el tema de los derechos del trabajador inmigrante son de gran importancia, y por eso la campaña Justicia para Limpiadores se sumó a la convocatoria de la marcha del 7 de octubre.

**E**n diciembre del 2006 se realizó una intensa campaña para lograr de parte de las empresas de limpieza el reconocimiento sindical a nivel de toda la ciudad y no solamente en determinados edificios. Este reconocimiento permitiría al sindicato fijar en una sola negociación al pago y condiciones laborales de los trabajadores de limpieza de todos los edificios.

Los objetivos de la jornada de diciembre eran ISS, Mitie y Lancaster, tres gigantes de la limpieza en Londres. La campaña consistió en bulliciosas manifestaciones diarias fuera de los edificios donde estas empresas tienen sus más prestigiosos y lucrativos contratos. Uno de los edificios que más atención recibió en este sentido fue la sede del banco de inversiones más grande del mundo Goldman Sachs, el cual es dueño también de casi la mitad de ISS, la compañía que limpia sus oficinas y la cual es la compañía de limpieza más grande del mundo.

Gracias a estas tácticas que incluyeron en su momento la toma de la recepción de Goldman Sachs por parte de los trabajadores de limpieza y un hábil manejo de los medios locales la campaña logró su propósito; pero la lucha continúa.

Vale anotar que el último día de la jornada los trabajadores de limpieza se sumaron a una manifestación convocada por Sin Fronteras (No Borders) en las puertas de la empresa encargada de seguridad en el centro de detención de inmigrantes de Harmondsworth como acto solidario por los detenidos y en contra

de las condiciones inhumanas y maltratos que sufren.

Justicia por los limpiadores tiene mucho potencial para involucrar a los trabajadores latinoamericanos y de hecho cientos de latinos ya se han sindicalizado, gracias también al gran trabajo de reclutamiento de parte de la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos durante los últimos tres años. Sin embargo muchos de estos nuevos afiliados no han encontrado la forma de participar en el sindicato. Esta situación se debe en parte a las barreras lingüísticas y otras formas de marginación. Pero también se debe al hecho de que las personas que no trabajan en edificios o empresas priorizadas por el sindicato reciben poco respaldo cuando buscan organizarse en el sitio de trabajo.

Aparte de eso el sindicato todavía no está en plenas condiciones de asesorar a los afiliados que tienen dificultad para hablar en inglés. Es una situación donde la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos ha tratado de tener un impacto positivo sin la suficiente reciprocidad de parte del sindicato. Tal vez para integrar más la fuerza laboral latina en Londres al movimiento obrero resultarán claves los métodos empleados para involucrar a los trabajadores latinoamericanos en la marcha por los indocumentados, es decir, un acercamiento a través de los medios comunitarios, iglesia y otros espacios de socialización además del lugar de trabajo. Indudablemente cuanto más se integren más unido y fuerte será el movimiento en general.

### Eventos

**Sábado 10 de febrero: Manifestación: ¡Que Cierren Harmondsworth and Colnbrook Immigration Removal Centres! 11.30 horas Colnbrook By Pass, Harmondsworth West Drayton UB7 0HB, cerca de Heathrow. Contactarse con noborderslondon@riseup.net o tel: 07983 274 568 para averiguar transporte colectivo desde el centro de Londres.**

**Jueves 22 de febrero: Reunión para organizar la gran marcha por la legalización de los indocumentados programada para el 7 de mayo. A las 19:00 horas, Transport House, 128 Theobalds Road, London WCX1H (metro: Holborn). Bienvenidos todos. Traducción disponible.**

**Sábado 31 de marzo; Conferencia sindical contra los controles de inmigración. 13:00-17:30 horas (refrigerio desde las 12), Asylum Link, St Annes Church, Overbury St, Liverpool 7. Convoca: Noone Is Illegal: info@noii.org.uk**

**Lunes 7 de mayo: Marcha por la Legalización de los Trabajadores Inmigrantes, centro de Londres.**

Mexico

# Represión en Oaxaca

Bajo el mando del gobernador oaxaqueño el estado vuelve a golpear

Francis Andrews



victoriajaguar

La explosión de violencia que ocurrió tras la protesta pacífica en Oaxaca el año pasado es ejemplo de una tendencia que viene definiendo el paisaje histórico de México y del continente Latino Americano en general.

En 2004, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, miembro del ala más conservador del Partido Revolucionario Institucional, llegó al poder entre acusaciones de elecciones truncadas. Sus últimos dos años han sido caracterizados por corrupción y conflicto, y la última confrontación con su pueblo ha suscitado críticas a nivel internacional.

El 1 de Mayo 2006, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se dirigió a Ruiz con una petición demandando un incremento salarial y la mejora de condiciones laborales. En vez de hacer caso a estas peticiones, Ruiz gastó millones de pesos en una campaña a través de los medios de comunicación para refutar dichas demandas. Tras esta típica falta de respuesta positiva por parte del estado, los docentes organizaron una huelga el 22 de mayo y un piquete en el Zócalo. Organizaciones indígenas y de base se juntaron e insistieron que su derecho básico a una infraestructura decente no estaba siendo garantizado por el estado. A lo largo del siguiente mes, la protesta se convirtió en un movimiento masivo. Hubo varias marchas de más de 200.000 personas y Ruiz fue objeto de críticas hechas por gran parte de la sociedad Mexicana.

El 14 de Junio Ruiz ordenó el desalojo del piquete a toda costa. La policía estatal llegó al centro de la ciudad, golpeando a los protestantes y asfixiando a niños/as y mujeres embarazadas. En respuesta a esto, el movimiento organizó su tercera marcha masiva y se volvió a formar un enorme piquete. La Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), formada por unas 365 organizaciones de varios sectores, se estableció entre el 17 y el 21 de Junio, y el 20 de junio se eligió un liderazgo colectivo provisional. APPO, que sigue la línea de un modelo participativo en su trabajo, pudo así unir a todo un mosaico de sectores que hasta ahora trabajaban aisladamente. El movimiento organizó una marcha a finales de junio que reunió a más de 1 millón de ciudadanos y ciudadanas del estado de Oaxaca. A finales del mes de julio, un grupo de mujeres del movimiento creó la Coordinación de Mujeres de APPO, y tomó control de los medios de comunicación estatales. Consecuentemente, los

llamamientos que se hicieron a través de la radio llegaron a una mayor audiencia y el apoyo por el movimiento creció.

Ante el creciente número de voces que pedían su resignación, Ruiz endureció sus acciones. Entre el 7 y el 22 de agosto, la policía federal y estatal dispararon contra las personas que participaban en la protesta y arrestaron a miembros/as de la APPO en la calle. El 22 de agosto la policía disparó, matando a dos personas e hiriendo a muchas más. Ese mismo día, en las televisiones de todo el mundo se mostraron imágenes de hombres armados conduciendo furgonetas de la policía a través del centro de Oaxaca. El uso de la ley marcial por parte del estado en contra de protestas pacíficas se ha

convertido en todo un símbolo de la historia de la brutalidad de estado en México.

La agresividad con la que había reaccionado Ruiz fue puesta en evidencia todavía más a través de la condena popular que hubo hacia el asesinato el 27 de octubre del periodista de Indymedia Bradley Will y otros tres ciudadanos, a manos de policías vestidos de civil. Su afirmación que 'es el último suspiro de un movimiento que ya se ha desintegrado' fue contrarestanda por las marchas y protestas que continuaron en desafío a las amenazas realizadas por las fuerzas armadas dirigidas por el estado. Enzozos, en los días después del asesinato de Will, el presidente saliente Vicente Fox llevó a miles de agentes de la Policía Federal Preventiva a Oaxaca y el número de redadas, detenciones y desapariciones crecieron dramáticamente. Los días 30-31 de octubre, 180,000 docentes provenientes de cinco estados Mexicanos se declararon en huelga en solidaridad con APPO y demandando un fin a la brutalidad policial y pidiendo la resignación de Ruiz.

Ruiz reafirmó sus intransigentes políticas hacia la oposición para ganar apoyo en los días antes de la inauguración presidencial el 2 de diciembre del candidato derechista del PAN, Felipe Calderón. En la última semana de noviembre hubo 171 detenidos, de los cuales 142 han sido encarcelados a cientos de kilómetros de Oaxaca. Organizaciones de derechos humanos en México afirmaron que conocon de al menos 36 casos de tortura, y las pocas familias que han podido hablar con sus familiares cuentan que estos fueron golpeados brutalmente y que las mujeres fueron amenazadas con ser violadas. El 29 de diciembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó la muerte de 20 personas y notificaron las cifras de 349 detenciones arbitrarias y 370 personas heridas. La Comisión también concluyó que en el estado de Oaxaca "todavía no existen las condiciones suficientes y necesarias para la defensa y el respeto de derechos humanos". Con Ruiz todavía en el poder, y con el APPO trabajando de manera clandestina y perseguidos por mandamientos judiciales, no parece que estos temas vayan a ser resueltos. Y es más, con Calderón diciendo que si por él fuera se desharía de todos los movimientos dociendo, es probable que estos estallidos de violencia en contra de la oposición pacífica se hagan aún más frecuentes en México.

